



FONASA NIVEL CENTRAL
DIVISIÓN FISCALÍA
DPTO. DE ASESORÍA JURÍDICO ADMINISTRATIVA



RESOLUCIÓN EXENTA 3G N° 12775 / 2022
MAT.: DENIEGA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
FORMULADA BAJO EL FOLIO N° AO004T0005224, DE
FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022.
SANTIAGO , 26/10/2022

VISTOS:

La solicitud de acceso a la información presentada con fecha 10 de octubre de 2022, bajo la referencia N° AO004T0005224, por don Mauricio Cabezas Mateluna, correo electrónico mauricio.cabezas@fonasa.cl, donde se indicó que la respuesta debía efectuarse por formato electrónico o digital; la Resolución Exenta 4A/N° 2036, de fecha 19 de junio de 2014, del Fondo Nacional de Salud, que designa funcionarios responsables en materias que indica para el cumplimiento de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública y delega facultades que indica;

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que, se presentó solicitud de acceso a la información con fecha 10 de octubre de 2022, bajo la referencia N° AO004T0005224, por medio del cual don Mauricio Cabezas Mateluna requirió a este Servicio lo siguiente: *"Buenos días vengo a solicitar nombre de los 38 psicólogos involucrados en fraude a FONASA"*.

SEGUNDO. Que, el artículo 8°, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, establece que *"son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen"*, agregando que *"sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional"*.

TERCERO. Que, a su turno, el inciso segundo, del artículo 10 de la ley N° 20.285, sobre transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado —en adelante Ley de Transparencia—, señala que: *"El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales"*.

Con relación a las excepciones legales, el artículo 21 de la citada Ley de Transparencia, dispone entre las causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información: *"1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales."* Por su parte, el numeral 2 dispone como causal: *"2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico"*.

CUARTO. Que, por otra parte, de conformidad a lo señalado en el artículo 2, de la ley N°19.628, sobre protección de datos de carácter personal, que en su parte pertinente señala: *"Para los efectos de esta Ley se entenderá por: letra f) Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables; letra g) Datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual"*.

Que, precisado lo anterior y relacionado con la petición que efectúa don Mauricio Cabezas Mateluna, el divulgar la información requerida podría ir en desmedro de la vida privada de las 38 personas que se consulta. En consecuencia, deben mantenerse bajo reserva mientras no se haya agotado la investigación penal encargada de determinar si existe una relación directa entre los nombres de los profesionales que se solicitan y los hechos denunciados, y si es que tales hechos pueden revestir caracteres de delito. Por consiguiente, lo descrito se enmarca en la hipótesis exceptuada que consagra el numeral 1, letra a) del artículo 21 de la ley N°20.285. Esto se debe a que, al tenor del procedimiento, no se ha acreditado el fraude señalado por sentencia ejecutoriada.

QUINTO. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la referida ley 19.628, las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo. En consecuencia, la ley establece que todos los datos personales son secretos.

SEXTO. Que, en la especie, y teniendo a la vista la definición de datos personales y datos sensibles previstas en el artículo 2, letras f) de la ley N° 19.628 ya citada, es posible colegir que lo solicitado en vuestra presentación contiene datos personales cuyo tratamiento solo puede efectuarse de conformidad a los artículos 4 y 10 del mismo cuerpo legal, disposiciones que señalan de manera taxativa que el tratamiento de los datos personales y sensibles sólo puede efectuarse cuando la ley lo autorice o el titular consienta expresamente en ello, y en el caso particular de los datos sensibles, además, es información que está sujeta al secreto que establece el artículo 7° de la mencionada ley.

SÉPTIMO. Que, en atención a lo expuesto precedentemente, no cabe sino concluir que la solicitud de acceso a la información presentada con fecha 10 de octubre de 2022, bajo la referencia N° AO004T0005224, tendrá que ser denegada, fundado en la causal de reserva a la información establecida en el artículo 21, número 1 letra a) y número 2, de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, y artículo 7, número 2, del Reglamento de la misma norma, en relación a los artículos 2, letras f) y 7 de la ley N° 19.628, disposiciones que permiten denegar el acceso a la información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de la esfera de su vida privada, así como también cuando su publicidad afecta el debido cumplimiento de las funciones del FONASA, toda vez que puede ir en desmedro de la investigación de un delito.

Para fundamentar esta causal, se hace presente que la información requerida, esto es, *“solicitar nombre de los 38 psicólogos involucrados en fraude a FONASA”*, dice relación con datos de carácter personal según la definición contemplada en la letra f) del artículo 2° de la ley 19.628, como también por, constituir este un dato de naturaleza sensible conforme a la letra g) del artículo 2° de la citada ley, pudiendo resultar las personas por las que se consulta afectadas con su divulgación, por lo que el FONASA se encuentra impedido de dar a conocer los antecedentes solicitados.

En este contexto, resultan aplicables las Recomendaciones del Consejo para la Transparencia sobre protección de datos personales por parte de los órganos de la Administración del Estado, apartado IV, punto 3 (definiciones de datos personales y sensibles), señalando al respecto que cuando dentro de la información que se ordena entregar se contengan antecedentes o datos que permitan identificar o determinar a su titular, se solicita el resguardo de dichos antecedentes pues se le considera dato personal, al cual sólo puede accederse con la autorización de su titular o cuando la ley lo permite, de acuerdo al artículo 4° de la ley N° 19.628.

A lo expuesto, hay que agregar que al tratarse de datos que han sido obtenidos de fuentes no accesibles al público, éstos se encuentran sujetos a la hipótesis de secreto descrita en el artículo 7° de la mencionada ley 19.628, teniendo el servicio un deber de reserva respecto de dichos datos.

Finalmente, es dable señalar que lo razonado en los párrafos precedentes se ajusta plenamente a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 No. 4, de la Constitución Política de la República, que asegura a todas las personas la protección de sus datos personales, y que el tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 8°, inciso segundo, de la Constitución Política de la República; el artículo 21, núm. 2, de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la información pública; el artículo 7 núm. 2, del Decreto Supremo N° 13, de 2.009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública; artículos 2, letras f) y g), y 7, de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada; el artículo 61, letra h), del D.F.L. N° 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; las facultades establecidas en los artículos 52 y siguientes del Libro I del D.F.L. N° 1/2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. N° 2763, de 1979 y de las Leyes Nos. 18.933 y 18.469, ambas del Ministerio de Salud; Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Exenta 4A/N° 2036, de fecha 19 de junio de 2014, del Fondo Nacional de Salud, que designa funcionarios responsables en materias que indica para el cumplimiento de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la información Pública; Resolución Exenta 4A/N° 28, de fecha 20 de marzo de 2019, que establece la nueva estructura y organización interna del Fondo Nacional de Salud y delega facultades que indica y sus modificaciones posteriores; y lo establecido en la Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, dicto lo siguiente:

RESOLUCIÓN:

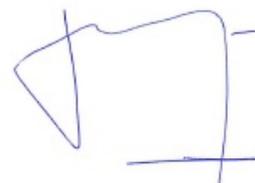
1. **DENIÉGASE** la solicitud de acceso a la información presentada con fecha 10 de octubre de 2022, bajo la referencia N° AO004T0005224.

Se cumple con informar que vencido el plazo legal que este Servicio tiene para la entrega de la información, o denegada ésta, la requirente tiene derecho a impugnar el presente acto administrativo, recurriendo ante el Consejo para la Transparencia, solicitando amparo a su derecho de acceso a la información, conforme

lo establece el artículo 24 de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, reclamación que deberá presentarse dentro del plazo de quince días contado desde la notificación de esta resolución.

2. Notifíquese la presente resolución al solicitante por correo electrónico.

"Por orden del Director"



**JUAN FUENTES DIAZ
JEFE(A) SUBROGANTE
DIVISIÓN FISCALÍA**

JFD / JTE / ncg

DISTRIBUCIÓN:

SUBDPTO. OFICINA DE PARTES

DPTO. DE ASESORÍA JURÍDICO ADMINISTRATIVA

Firmado Electrónicamente en Conformidad con el Artículo 2 y 3 de la Ley 19.799. Validar número de documento en www.fonasa.cl

aHG0hIWY

Código de Verificación

